



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veintitrés de septiembre de dos mil veinte**

#### **S19-390**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN  
Demandante: **NELLY ASTRID MORALES CASTAÑO**  
Demandado: **COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-020-2018-00184-01.  
Tema: ineficacia  
Decisión: **CONFIRMA y ADICIONA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones dentro del proceso de la referencia.

En los términos del poder allegado, se reconoce personería al apoderado sustituto, Dr. JUAN ESTEBAN GALEANO CORREA identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.035.433.997 y Tarjeta Profesional Nro. 312.539 expedida por el C. S. de la J., para que continúen representando los intereses de Colpensiones de acuerdo a la sustitución otorgada por la Dra. VICTORIA ANGÉLICA FOLLECO ERAZO.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 27** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicita la demandante mediante este trámite, en síntesis, que tras la declaratoria de **INEFICACIA** del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al

régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad, ordenándose el retorno de la totalidad de los aportes junto con los rendimientos financieros.

### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 22 de octubre de 1967.
- ✓ Que estuvo afiliada al ISS cuando inició su vida laboral en octubre de 1986 al servicio de la EMPRESA NACIONAL DE RECURSO.
- ✓ Que en febrero de 1995 se trasladó a Protección con ocasión de la confusión generada con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fondo que el 14 de diciembre de 2016 realizó una simulación pensional según la cual, bajo la modalidad de retiro programado, podría acceder a una mesada de \$3.912.398 a los 60 años (con cotizaciones ininterrumpidas y esperando la fecha de redención normal del bono pensional), inferior a la de \$6.786.046 que obtendría en el régimen de prima media (a los 57 años y con una fidelidad del 100% de las cotizaciones).
- ✓ También enlista los aspectos o características de cada régimen que nunca les explicaron.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció PROTECCIÓN. Adujo frente a los hechos que eran ciertos los relacionados con la edad de la demandante y su afiliación a dicho fondo el 15 de febrero de 1995 tras haber recibido una información clara y suficiente por parte de la asesora que le explicó las características principales y diferenciadoras del régimen, personal que era capacitado permanente, contando con un conocimiento técnico. Agrega que no resultaba lógico ni coherente que a la fecha la accionante pretendiera invalidar su decisión con argumentos de conveniencia y favorabilidad en el monto de su mesada, lo que no constituía un vicio propio del consentimiento, ni causal de ineficacia. También expone que la actora fue objeto de una re-asesoría el 11 de julio de 2014, le faltaban 3 meses para cumplir 47 años, oportunidad donde le explicaron cómo se liquidaba el monto y el plazo que tenía para retornar al régimen de prima media, sin embargo su inactividad manifestó su decisión libre y voluntaria de continuar afiliada al RAIS, ratificando su postura inicial.

Por su parte COLPENSIONES adujo que únicamente le constaban los hechos relacionados con la edad de la afiliada, así como la petición elevada al fondo para retornar, los demás no le constaban.

#### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 27 de noviembre de 2019, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, declaró no sólo la ineficacia de la afiliación al RAIS, sino además que la demandante había permanecido en el régimen de prima media sin solución de continuidad. Condenó a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones, en un término no mayor a 30 días contabilizados luego de la ejecutoria de la decisión, la totalidad de los aportes que poseía la actora en la cuenta de ahorro individual junto con los respectivos rendimientos

Finalmente condenó en costas a Protección S.A. y a Colpensiones, fijando como agencias en derecho la suma de dos (2) SMLMV, importe que debían asumir las demandadas en proporción del 50%.

Dentro del término concedido por la ley, Colpensiones interpuso y sustentó recurso de apelación.

### **2. ARGUMENTOS**

#### **2.1. DEL JUEZ PARA CONDENAR**

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

#### **2.2. RECURSO DE APELACIÓN DE COLPENSIONES**

Solicitó que se adicionara la sentencia dado que también debían trasladarse los gastos de administración, fondo de garantía de pensión mínima y seguros provisionales, sin que hubiera lugar a ningún tipo de descuento ya que no se puede afectar la estabilidad financiera del sistema por un acto que carecía de eficacia. Además se opuso a la condena en costas que le fue

impuesta toda vez que la Litis giró en torno a la falta de información que suministró la AFP, hecho que le era ajeno pues siempre actuó de buena fe y siguiendo los preceptos legales, entonces no existía ninguna razón jurídica o fáctica para ser condenada por ese concepto.

### **2.3. ALEGATOS PRESENTADOS POR COLPENSIONES**

Solicitó que se modificara la decisión en el sentido de ordenar a PROTECCIÓN S.A., trasladar la totalidad de los saldos que reposaban en la cuenta de ahorro individual de la demandante, esto es, las cuotas de administración, la garantía de pensión mínima, valores de reaseguros o seguros provisionales, además de los rendimientos financieros con todos sus frutos e intereses, valores que deberían estar debidamente indexados. Que además se debía revocar la condena en costas pues era un tercero ajeno al acto ineficaz que se condena. Expresamente señaló que:

Se tiene que la ineficacia al traslado reconocida por el juez de instancia, ordenó a la AFP PROTECCIÓN S.A., trasladar a la Administradora colombiana de pensiones – COLPENSIONES-, la totalidad de los aportes que posee la demandante en su cuenta de ahorro individual, ello con sus respectivos rendimientos y consecuentemente se ordenó a COLPENSIONES recibir dichos aportes y sus rendimientos, rehabilitando la afiliación de la señora NELLY ASTRID MORALES CASTAÑO al régimen de prima media con prestación definida, así mismo al reconocimiento y pago de las costas procesales.

Ahora bien, conforme a lo anterior, debe indicarse que la referida decisión omite dineros que reposan en manos de la AFP codemandada, pues como se dijo, el fallo proferido por el juzgador de instancia refiere al traslado de los recursos y los rendimientos de la cuenta individual de la demandante únicamente, desconociendo, con base en el principio de la estabilidad financiera consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política Colombiana, el cual fue modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 003 de 2011, la totalidad de los valores que reposan en manos de la AFP del Régimen ahorro individual con solidaridad, esto es, las cuotas de administración, la garantía de pensión mínima, valores de reaseguros o seguros provisionales, además de los rendimientos financieros con todos sus frutos e intereses, igualmente las los valores mencionados las anteriormente deben de ser indexados, toda vez que estos dineros se han causado como resultado del trabajo de la demandante, por lo que, los mismo deben ser asumidos por el fondo privado con cargo a sus propios recursos. Lo anteriormente expuesto, encuentra sustento en el precedente jurisprudencial que ha venido construyendo la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, tal y como se evidencia en sentencias, SL 31989 de 2008, SL 4,964 de 2018, SL 4.989 de 2018, SL 1.421 de 2019 Y SL 1.688 de 2019 (...)

Lo anterior, por cuanto precisamente, la estabilidad financiera del sistema no se puede ver afectada por un acto que carece de eficacia. Por otro lado, respecto de la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia, la misma no es procedente, teniendo en cuenta que COLPENSIONES es un tercero de buena fe que fue citado al proceso precisamente en calidad de administradora de los recursos del Régimen de prima media con prestación definida, sin que nada haya tenido que ver en el acto de traslado celebrado entre las partes y que fue declarado ineficaz.

Además, debe tenerse en cuenta que COLPENSIONES en ejercicio del derecho constitucional a la defensa no le queda otra alternativa que oponerse a unos hechos y unas pretensiones que no le constan y de los cuales no hizo parte, debiendo esperara que los supuestos fácticos sean demostrados en el transcurso de un proceso y que sea el Juez con sus facultades de impartir justicia quien defina si existió o no una vulneración de derecho a la demandante, resultando injusta entonces la condena por este concepto

### 3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, el análisis de la Sala estaría llamado únicamente a examinar que haberes le corresponde retornar a Protección S.A., además del descontento de Colpensiones respecto de la condena en costas que le fue impuesta en primera instancia.

No obstante lo anterior, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad. Es por ello que inicialmente se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se mirará los asuntos planteados en el recurso de apelación.

### 4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, como en este caso, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información  <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte del afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende de un lado, que para la época de traslado al RAIS, concretamente 15 de febrero de 1995 a Protección S.A. (fl.32) existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado básicamente por dos cosas, de un lado, la supresión del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración. Y de otro lado, el relato de algunos beneficios del traslado, pero sin mediar explicación de cómo podrían acceder a los mismos.

Expresamente la señora Nelly Astrid Morales Castaño en el aludido interrogatorio expuso que era Tecnóloga en análisis y programación de sistemas, que fue citada a una reunión grupal (20-25 personas) en la empresa donde trabajaba, duro aproximadamente 1 hora y que una asesora le informó que el ISS iba a desaparecer, que estaría en peligro su parte pensional, que el fondo tenía muchas ventajas y le ayudaría a la pensión. También le indicaron que se podía pensionar antes de la edad que se exigía en el ISS.

Frente a la REASESORÍA llevada a cabo el 11 de junio de 2014, mencionó que era de usanza realizarse 2 reuniones al año para enterarse de los beneficios extralegales y que muy seguramente fue en una reunión grupal que se hacían en los stands donde firmó, no recuerda bien esta situación, no tiene idea porque la decisión fue aplazada. No leyó el formato de la re-asesoría por ende no pudo haber comprendido.

Destáquese además que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó, como lo destacó la falladora, la existencia de una explicación completa por parte de la asesora.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó,



que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echa de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto consultada.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la RE-ASESORÍA de la que fue objeto la demandante (fl.71), pues la información suministrada por el fondo en tal momento, ad portas del cumplimiento de los 47 años, en parte alguna puede asimilarse al cumplimiento del deber de información cuando se surtió el traslado, ni mucho menos es dable señalar que la persona contaba con la suficiente ilustración para tomar una decisión sobre su futuro pensional.

Incluso, en gracia de discusión, aunque PROTECCION hubiese desmotivado a la accionante al avizorar la posible inconveniencia de permanecer en dicho fondo, a igual conclusión llegaría la Sala pues ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido que ello NO tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por las razones referenciadas en la sentencia de radicación 68.838 de 2019, entre ellas:

... porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.

Aunado a ello, si la AFP incumplió su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una re-asesoría a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES **todos** los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de

radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se ADICIONARÁ la decisión adoptada por la fallador, quien ordenó a Protección devolver todos los valores que se encontraban en la cuenta de ahorro individual, panorama bajo el cual estaría incluyendo únicamente los aportes más sus rendimientos, excluyendo los restantes conceptos pagados.

Y es que lo procedente es el retorno de la totalidad del dinero recibido por concepto de afiliación, toda vez que no se puede ver afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente al monto total del correspondiente aporte legal.

Empero, esto no quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Finalmente, en cuanto a la oposición a la **condena en costas** presentada por Colpensiones resulta pertinente indicar que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, las mismas proceden por el solo hecho de salir adelante o no las pretensiones. Sin embargo, ha de aclararse que esta Sala ha utilizado un criterio similar al que ha servido para exonerar a COLPENSIONES de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 cuando su negativa está apoyada en la aplicación directa de la ley, sin el alcance interpretativo que pueden lograr los jueces, para dejar de imponer las costas en primera instancia a su cargo, pues cualquier negativa respecto al traslado pretendido habría obedecido al

cumplimiento en sede administrativa de la prohibición consagrada en la Ley 797 de 2003, en torno a la imposibilidad de trasladarse entre régimen cuando un afiliado se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse.

Empero, dicho criterio de exoneración NO se extiende respecto de la administradora del RAIS, pues lo que en este aspecto se analiza no es precisamente la negativa de la respuesta a un derecho de petición, sino los efectos de una afiliación a otro régimen, es el actuar u omisión de la administradora del RAIS en cuanto al cumplimiento del deber de información el que cimenta la necesidad de la afiliada de activar el aparato judicial en aras de obtener la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico, habiendo salido avante las pretensiones que en tal sentido se incoaron.

Por lo expuesto se revocara únicamente las costas que en primera instancia se impusieron a cargo de Colpensiones.

En consecuencia la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, adicionándola y revocándola en los aspectos antes aludidos.

Sin costas en esta instancia.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2019 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **NELLY ASTRID MORALES CASTAÑO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro.46.663.706 contra **PROTECCION S.A y COLPENSIONES**.

**SEGUNDO:** se **ADICIONA** al numeral segundo del fallo al numeral segundo, en el sentido que la Administradora del RAIS accionada trasladará a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante desde el cambio de régimen, es decir, incluyendo también los costos de administración, primas de seguros de invalidez y

sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia, manteniéndose el plazo concedido por el a quo.

**TERCERO:** sin costas en esta instancia. Se revoca las tasadas en primera instancia a cargo de Colpensiones.

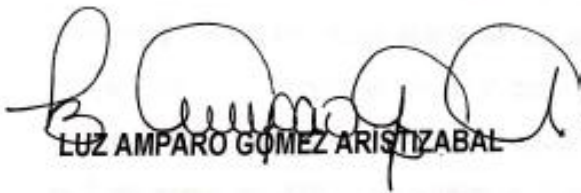
Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

*(firmas escaneadas)*

Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

**CERTIFICO:** Que la providencia anterior fue notificada por ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 24 de SEPTIEMBRE DE 2020

---

Secretario